



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

Expediente N° 17384/2021

AUTOS: COTECUD S.A.S.E. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

COTECUD COMPAÑÍA TÉCNICA SUDAMERICANA S.A.S.E. apela la Resolución N° 843/18 (DI CRSS) que no hace lugar al recurso de revisión interpuesto, confirmando el ajuste intimado por la Obra Social del Personal de la Industria de la Alimentación.

La apelante efectúa el depósito de la deuda cuestionada en autos, (conforme lo dispuesto por la ley 18.820) por lo que se procederá a analizar el recurso impetrado.

Sostiene la recurrente que se dictó una resolución extra petita ya que dictamina sobre deudas no discutidas ni alegadas en estas actuaciones. Señala que sufrió las retenciones correspondientes a los recursos reclamados, y se pretende que su parte pague dos veces el mismo concepto sin convocar a estas actuaciones a los responsables directos de tales recursos.

Cuestiona el procedimiento llevado a cabo por la Obra Social, la cual reconoció las retenciones sufridas por COTECUD COMPAÑÍA TÉCNICA SUDAMERICANA S.A.S.E. y su imputación al rubro contribuciones patronales de la obra social, pero no habían ingresado totalmente los fondos correspondientes. Manifiesta que se la privó de pruebas esenciales relacionadas con la corrección de su proceder. La deuda que señala la administración no coincide con la deuda que intima la obra social ni con los montos impuestos.

Alega que es una empresa de servicios eventuales que desarrolla su actividad en diversas jurisdicciones del país, actuando conforme la Ley Nacional de Empleo N°24.013. Asigna su personal temporario a sus distintos clientes para que en los destinos específicos cumplan las tareas eventuales para los cuales han sido convocados.

Señala que la Obra Social determinó deuda por los periodos fiscales diciembre 2010 y enero, febrero, marzo, junio y julio de 2011, único dato que aporta el acta impugnada, ya que no define, precisa, explica, detalla, ni fundamenta aspecto alguno del proceder de su





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

mandante. No hay mención de los empleados comprendidos en el Convenio sobre cuyos salarios se habrían devengados las supuestas diferencias.

Analiza la Declaración Jurada al Sistema Único de Seguridad Social F.931 única referencia del inspector actuante, y sostiene que ha abonado la totalidad de los recursos de la seguridad social en los periodos respectivos. Recién con posterioridad se habla de falta de ingreso de las retenciones practicadas por la clientela. Refiere en tal sentido lo dispuesto por el art. 29 de la L.C.T. en cuanto la empresa usuaria está obligada a retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término. Su mandante ha sufrido retenciones que se han practicado sobre las distintas facturas por servicios que ha emitido a su clientela.

Manifiesta que esa circunstancia fue conocida ex post facto y no se brindó detalle de las empresas usuarias que habrían incurrido en semejante proceder, en que periodos se habría generado tal inconducta, montos involucrados etc.-

No se le aceptó la prueba pericial. Realiza una serie de disquisiciones en torno de la aplicación de la ley 11.683, si bien reconoce la responsabilidad solidaria que pudiera caber en razón de la omisión de ingresar los recursos pretendidos ningún detalle se brindó de las empresas involucradas, montos retenidos y no ingresados. Plantea la nulidad de las resoluciones que impugna.

Afirma que la supuesta deuda determinada por el fisco ni siguiera coincide con la reclamada por la obra social, tanto respecto de los montos, como de los rubros y conceptos adeudados, que es un 40% inferior a la determinada por la obra social. Plantea la nulidad de las actas del procedimiento, considera irracional y arbitraria la decisión cuestionada y se ha violado el principio de la carga de la prueba

La AFIP en su contestación al memorial recursivo, aclara que a pesar de que en los comprobantes exigidos por el art. 5 de la Resolución General DGI 3983/95 consta la retención efectuada por las empresas usuarias de la deuda que se reclama, de acuerdo de lo informado por esta Administración Federal, dichas retenciones no han sido ingresadas, por lo que esa parte de la deuda permanece impaga. Asimismo, la falta de pago de la retención por parte del agente obligado al pago de los aportes y contribuciones de la Ley 23.660, ello en virtud de que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria en cabeza de dicho agente, el obligado directo se encuentra siempre obligado al pago de la referida obligación, tal es el criterio esgrimido por el inc. c) del art. 8 de la ley 11.683, incorporado a las obligaciones de la Seguridad Social por los decretos 507/93 y 2102/93, que reproduce.

Sostiene que el procedimiento establecido en la RG (DGI) 3983/95 no exime a COTECUD S.A.S.E. de la responsabilidad solidaria que establece el art. 8 de la ley 11683

Fecha de firma: 04/04/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#35895026#341932410#20230403122249510



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

(ref. Ley 25.795) y que, a todo evento, la mencionada ley está por encima de la Resolución General DGI 3983/95. El procedimiento establecido en dicha RG, sólo ha sido dictado a los fines de una implementación práctica que tiene por objeto asegurar la percepción por parte de los organismos de la Seguridad Social de su acreencias en forma eficaz, pero que en modo alguno puede ser tomado como eximente de una obligación que naturalmente e ineludiblemente cae en cabeza del empleador, en este caso COTECUD S.A.S.E. Si bien la referida Resolución adjudica al comprobante de retención el carácter de pago a cuenta, dicho documento carece de validez cuando el pago no fue efectuado. Dicha interpretación resulta compatible con lo dispuesto por el inc. c) del art. 8 de la ley 11.683 norma que, por otra parte ostenta rango superior y debe prevalecer. La deuda existe y la obligación pesa tanto sobre la empresa eventual como de la usuaria. De acuerdo a las normas citadas, OSPIA puede exigir el pago de su acreencia tanto a COTECUD S.A.S.E. como a las empresas usuarias.

Señala que resulta contrario a toda lógica que la empresa de servicios eventuales justifique desligarse de la obligación que le impone la ley 11683 (ref. Ley 25.795) mediante una Resolución de menor rango, como así que se pretenda que la obra social realice tantas inspecciones parciales como usuarias existan para establecer la cantidad de trabajadores y deuda que surja de la falta de pago de cada una de éstas cuando, son cargas de la contribuyente. Es el empleador quien debe demostrar que las contribuciones fueron abonadas pues cuenta con elementos suficientes para establecerlo, circunstancia ésta que desvirtúa el argumento defensivo e impugnatorio de la empresa. Asimismo cabe decir que la deuda surge de la propia documentación que COTECUD S.A.S.E. presentara ante esta AFIP, donde también se vuelcan los CUILES de los trabajadores a través del formulario 931. Como la AFIP coteja los datos con la Superintendencia de Servicios de Salud para verificar eventuales traspasos, no caben dudas que la empresa conoce en detalle la nómina de sus trabajadores, el destino de los fondos y la certeza de haber sido documentación emanada de ella misma. No hay posibilidad de error en la base de cálculo indicada en el Acta.

Ratifica que de los argumentos expuestos surge que la responsabilidad que pesa sobre el empleador (solidaria con la usuaria), el hecho concreto de que existe deuda en los periodos volcados en el Acta, que dicha deuda está aún impaga y que refiere a trabajadores beneficiarios de OSPIA, habilitan concluir que estos importes jamás fueron ingresados y que, por lo tanto, el mecanismo pretendido encubre una evasión que AFIP no puede avalar. Ratifica la regularidad de procedimiento y que no se ha violentado el derecho de defensa del administrado

Fecha de firma: 04/04/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#35895026#341932410#20230403122249510



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

El acta de emplazamiento de la obra social, a mas de señalar periodos e importes adeudados expresamente señala que la presente intimación comprende a contribuciones patronales ley 23.660 .queda formalmente intimada su carácter de responsable personal y solidario conforme ley 11.683 art. 8. Señalando como documentación analizada boletas de depósito, DDJJ 931 ante la AFIP DGI, listado retenciones a usuarios.

En la planilla respectiva se identifican globalmente según los periodos, los sueldos, cantidad de personal, aportes y contribuciones, total, art. 19 ley 23.660, OSPIA Banco, fecha , importe, señalándose con “ DC” en cada periodo las diferencias de contribuciones detectadas;

No se realizan mayores precisiones.

Ante la impugnación de la firma, se abre a prueba excepto pericial por considerarse innecesaria

En el Dictamen Jurídico 006/2013 de la obra social se analizan las actuaciones a tenor de las constancias de la cauda y alegaciones de la contribuyente, se rechazan las nulidades planteadas y se ratifica el procedimiento incoado. Se especifica que a pesar de que en los comprobantes exigidos por el art. 5 de la Resolución General DGI 3983/95 puede constar la retención efectuada por las empresas usuarias de la deuda que se reclama de acuerdo de lo informado por la AFIP dichas retenciones no has sido ingresadas por lo que esa parte de la deuda permanece impaga. Que los formularios AFIP 931 por sí solos no acreditan el efectivo ingreso de las retenciones realizadas por los usuarios Refiere la responsabilidad solidaria y ratifica la facultad de la obra social para exigir el pago de la deuda tanto COTECUD como a las empresas usuarias señalando que los datos surgen de la documentación que esa empresa presenta a la AFIP de donde surgen los cuiles de los trabajadores. etc.

La cuestión debatida se centra en determinar si el procedimiento se ha llevado a cabo correctamente garantizando el derecho de defensa al presentante y , en su caso, si ante la deuda determinada la obra social podía requerir su pago a la misma no obstante haberle sido retenidos los importes correspondientes por las empresas usuarias.

El artículo 8º de la ley 11 683 –conforme redacción actualizada) es aplicable a los recursos de la seguridad social, conforme lo establece el Decreto 2102/93 y cc.

Por el mismo, en relación con los responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo. Señala que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometida

“c) Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener, una vez vencido el plazo de quince (15) días de la fecha en que correspondía efectuar la retención, si no

Fecha de firma: 04/04/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#35895026#341932410#20230403122249510



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

acreditaren que los contribuyentes han abonado el gravamen, y sin perjuicio de la obligación solidaria de los contribuyentes para abonar el impuesto no retenido desde el vencimiento del plazo señalado.

“Asimismo, los agentes de retención son responsables por el tributo retenido que dejaron de ingresar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la forma y plazo previstos por las leyes respectivas.

“La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá fijar otros plazos generales de ingreso cuando las circunstancias lo hicieran conveniente a los fines de la recaudación o del control de la deuda.

Por otra parte, la resolución 3983/95 establece un régimen de retención para el ingreso de las contribuciones patronales a cargo de las empresas de servicios eventuales, del personal permanente discontinuo, con destino al Sistema Único de la Seguridad Social —con excepción de la correspondiente al régimen de asignaciones Familiares— Reglamenta todo lo atinente al régimen de retención que deberá practicarse en oportunidad de efectuarse el pago de cada factura que emita la empresa de servicios eventuales. A estos fines, el término 'pago' deberá entenderse con el alcance asignado en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones. Especifica el procedimiento a llevarse a cabo.

Conforme lo señalado por el artículo 7 de la mencionada resolución los agentes de retención depositarán el importe de las retenciones practicadas dentro de los TRES (3) días de efectuadas las mismas, en la forma y condiciones establecidas por la Resolución General N° 3972, consignando en el formulario de declaración jurada N° 922 como 'Código de Régimen' el número 742.

A su vez, el artículo 8° señala :El agente de retención que omita efectuar y/o depositar las retenciones, o incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por esta resolución general, será pasible de la aplicación de las sanciones e intereses previstos por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, por la Ley N° 23.771 y sus modificaciones y, en su caso, por la Resolución General N° 3756.

Se establece un capítulo especial respecto de las obligaciones de las empresas de servicios eventuales.

El art. 9° establece “Las empresas de servicios eventuales deberán incluir en la declaración jurada prevista por la Resolución General N° 3834 y sus modificaciones, la totalidad de su personal permanente, continuo y discontinuo, determinando los aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social.

Asimismo imputarán como pago a cuenta de las contribuciones patronales del mes que se declare, de conformidad al procedimiento establecido en la precitada resolución





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

general, los importes retenidos en el mismo período, de acuerdo al régimen instaurado en el Capítulo I de la presente.

No serán computables las retenciones que correspondan a remuneraciones devengadas hasta el mes de abril de 1995, inclusive.

El art. 10. dispone En el supuesto que los importes retenidos en un mes excedan el monto de las contribuciones patronales determinadas para dicho período, los mismos serán computables en períodos futuros.

El art. 11. señala A los fines previstos en el segundo párrafo del artículo 9º, los importes computables en concepto de retenciones serán los que resulten de los comprobantes válidos extendidos por el agente de retención, conforme lo dispuesto en el artículo 5º. Dicho requisito sólo podrá ser suplido por el acuse de recibo otorgado por esta Dirección General, que acredite el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 6º.

Ello así formalmente no se ha cuestionado que la recurrente incumpliera esta resolución .

Sin embargo, según la obra social y la AFIP existe deuda por dichos períodos, aunque con diferencias según la recurrente entre lo determinado por la obra social y lo informado por la administración. Esta deuda es la que se emplaza solidariamente a la apelante. Sin especificarse en concreto cuales son las usuarias o mayor identificación de la situación sobre la obligación incumplida-

Si bien es procedente el reclamo solidario conforme lo dispone la ley 11.683 ello amerita cuanto menos una minuciosa determinación de la deuda y su responsable primero, sobre todo a tenor de lo normado por la Resolución 3983/95, pues no es de suponer que esta se haya dictado para convertirse en letra muerta cuando existen circunstancias como la presente, donde sin mayores precisiones se determina una deuda respecto de las sumas retenidas.

Ambas disposiciones deben compatibilizarse a efecto de efectivizar esa responsabilidad solidaria, debiendo en consecuencia individualizarse cada situación a efecto de que la empresa de servicios eventuales a quien le han realizado las retenciones pueda constatar y verificar con el usuario el cumplimiento de los deberes a su cargo, en tiempo y en forma. Ello no obstante de la jerarquía legal que alega el organismo, y a modo de no dejar sin sentido de hecho o jurídico una disposición.

Por ello, es importante verificar si en las actuaciones donde se han dictado las resoluciones apeladas, (obra social y AFIP) se han cumplido y respetado los principios y garantías que deben imperar en todo proceso del que pueda determinarse, para el particular o administrado, la imposición de un cargo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Todo procedimiento judicial o administrativo debe garantizar al individuo el derecho de defenderse, garantía que no puede ser restringida. En el caso específico del procedimiento administrativo el principio del debido proceso legal, constituye no ya un derecho del administrado, sino una exigencia de mejor administración, pues éste no es un oponente de la Administración o en el caso la obra social, sino un coadyuvante importante en el logro de una actividad administrativa legítima y eficaz, para que aquélla pueda cumplir útilmente su rol de gestor indirecto del interés público y social que le ha sido conferido

La garantía del debido proceso legal lleva aparejado diversos elementos para el administrado: el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a que se dicte una decisión fundada que contemple sus alegaciones y resuelva sus pretensiones.

Para ello debe tener un conocimiento claro y concreto de la deuda que se imputa, evitándose generalizaciones o presupuestos no que surjan evidentes de las propias actuaciones.

Si en el proceso administrativo se procura la preparación y el dictado de actos administrativos con los cuales se satisface en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y los fines del Estado y en definitiva de la comunidad toda, no es menos cierto que estos actos están dirigidos por la exigencia de su legitimidad, o sea de su subordinación completa al orden jurídico del cual resulta todo lo atinente a la oportunidad, mérito y conveniencia (en sentido concord. Escola, Héctor J. Tratado General de Procedimiento Administrativo, Ed. 1973). Apreciaciones aplicables a los procedimientos incoados por la obra social y el acto dictado en su consecuencia.

En los procedimientos de impugnación es el particular quien pretende la actuación de la ley, en sentido lato, porque entiende que su pretensión procede por sobre que la que articula la Administración, o la Obra Social, sin perjuicio de que esta ratifique su accionar.

García Oviedo señala que "las exigencias propias de un estado de derecho imponen a la administración un régimen jurídico que ordene su vida y al propio tiempo, garantice a los particulares sus situaciones jurídicas frente al obrar de aquella"(García Oviedo, Derecho Administrativo, Madrid, 1959, t. 1, pag. 619).

Por ello, frente al derecho de la administración o en el caso de la obra social, de defender el interés que le ha sido conferido, están también los derechos de los particulares garantizados por la Constitución Nacional, que no pueden ser violados, sin que se de lugar a una acción tendiente a lograr su restablecimiento.

El procedimiento determinante de un cargo debe ser transparente, en el que se asegure el pleno y cabal conocimiento del interesado de la gestión que se lleve a cabo, permitiéndole argumentar, producir y controlar todas las medidas de prueba que proponga y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

hagan a su derecho, como así también las que la propia administración impulse en su búsqueda de la verdad. Con ello, no sólo se garantiza el derecho de defensa de éste, sino una mayor racionalización y eficacia de los trámites administrativos, facilitándose a los funcionarios que deben expedirse una información más amplia y completa.

Posteriormente, compete al organismo apreciar las probanzas producidas, no ya en base a principios rígidos sino de manera lógica y natural, aquilatando cada una de ellas en su individualidad y dentro del conjunto de la rendida.

En autos, se ha procedido a labrar actas genéricas, se ha aceptado que a la empresa le han realizado las retenciones respectivas, sin observar irregularidades a este respecto. Ningún otro elemento se especifica. En un principio el emplazamiento sólo referencia conceptos numéricos globales sin discriminar y concretar respecto de los sujetos involucrados la deuda determinada, recién a posteriori de la impugnación se mencionan las retenciones, pero no se verifican o refieren las usuarias involucradas, que habiendo efectuado retenciones no cumplieron con la manda legal, dando así fundamento a una reclamación solidaria de la empresa eventual.. Circunstancia que no es menor ya que su individualización permitirían evaluar el incumplimiento y en su caso permitir la producción de prueba o alegatos que hacen al derecho del imputado, y cuyo cumplimiento ratifica la legitimidad de acción solidaria contra la empresa eventual

Esas falencias no se compadecen con un proceso donde se respete adecuadamente el derecho de defensa del particular y lleva en mi ánimo a propiciar la nulidad de los actuados a efecto de que se proceda a la correcta identificación y determinación de la deuda, con amplitud de prueba del imputado, de la obra social y el organismo que se estime pertinente para el total esclarecimiento de los hechos

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al organismo, conforme art. 68CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y

Fecha de firma: 04/04/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#35895026#341932410#20230403122249510



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018) se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 1 UMA equivalente a PESOS DOCE MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE (\$ 12.479) (Conf. ac. 3/23), importe al que se adicionara el iva en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.03,Fallos 316,1533)

Por lo expuesto, propicio declarar la nulidad de la resolución recurrida y de las actuaciones administrativas previas, en los términos señalados. Con costas. Ordenar la devolución del importe depositado para acceder a la instancia judicial en el término de 20 días, Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 1 UMA equivalente a PESOS DOCE MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE (\$12.479) (Conf. ac. 3/2023) con más IVA en caso de corresponder.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero al voto que me antecede.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Fantini.

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal **RESUELVE:** 1) Declarar la nulidad de la resolución recurrida y de las actuaciones administrativas previas, en los términos señalados, con costas. 2) Ordenar la devolución del importe depositado para acceder a la instancia judicial en el término de 20 días; 3) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 1 UMA, equivalente a PESOS DOCE MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE (\$12.479) (Conf. ac. 3/2023) con más IVA en caso de corresponder

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

WALTER F.CARNOTA

Juez de Cámara





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

MPV

